

En tal sentido, JULIO OYHANARTE, que navegó entre la política y el derecho (integró la Corte Suprema en los años 1958 y 1990, bajo los gobiernos de Frondizi y Menem), dejó expuesta esta situación crudamente al sostener que "la militancia política en la medida en que sirvió para acreditar adhesión intelectual a la fórmula política dominante en cada etapa fue siempre tenida en cuenta y es natural y justo que así haya sido habida cuenta de las funciones de participación política que incumben a la Corte Suprema".

Así, si cotejamos el posicionamiento de la Corte Suprema en casos paradigmáticos de la jurisprudencia argentina que enfrentaron derechos individuales frente a políticas de gobierno, veremos que en la inmensa mayoría de los casos el alto tribunal se inclinó por apoyar las políticas del gobierno mayoritario.

Esta cuestión es verificable, particularmente en el cotejo de aquellos fallos dictados con motivo del ejercicio, por parte del poder político, de facultades en el marco de la doctrina de la emergencia, que rige la vida constitucional argentina desde la segunda década del siglo xx y que se incrementó progresivamente, hasta haberse instalado –aparentemente de manera definitiva– en la vida jurídica de la República.

Si bien, hasta la reforma constitucional de 1994, la única emergencia que mencionaba el texto constitucional era la política del estado de sitio previsto en el art. 23, la emergencia económica nació en la jurisprudencia de la Corte Suprema a partir de los conocidos fallos "Ercolano c/Lanteri de Renshaw"¹⁷⁷, de 1922, y particularmente "Avico c/de la Pesa"¹⁷⁸, de 1934.

La prudente doctrina de los fallos precedentes, seguida durante varias décadas, se amplió considerablemente en "Russo c/Delle Donne"¹⁷⁹ y en la causa "Cine Callao"¹⁸⁰, hasta desbordarse en "Peralta, Luis A. c/Estado nacional s/am-

¹⁷⁶ OYHANARTE, *Historia del Poder Judicial*, "Todo es Historia", n° 61, p. 94.

¹⁷⁷ Fallos, 136:170.

¹⁷⁸ Fallos, 172:71.

¹⁷⁹ Fallos, 243:472.

¹⁸⁰ Fallos, 247:121.

que, fallo de nuestro máximo tribunal que fuera fuertemente criticado por la doctrina.

La posición oficial de la Corte Suprema argentina en torno a la emergencia económica que sentara en "Peralta" dejó una sensación de imprevisibilidad en sus criterios, que afectó seriamente la seguridad jurídica de la Nación y que se revertió con gran fortaleza en el período histórico de fines de 2001 y principios de 2002, con motivo de la profunda crisis económica que afectó al país.

Ante esta situación, la Corte Suprema produjo dos fallos jurídicamente alentadores¹⁸², pero su enfrentamiento con el poder político y su falta de credibilidad social no le permitieron sostenerse en una situación de tanta inestabilidad institucional.

El proceso de recambio de sus integrantes no mejoró la situación que describimos y la "doctrina de la emergencia" se afianzó en la concepción jurídica de la nueva composición de la Corte Suprema, que en varios casos falló afectando muchos derechos del ordenamiento constitucional¹⁸³, recordándonos el "derecho de la realidad" que sostenía OYHANARTE.

§ 54. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN SU ACTUAL COMPOSICIÓN. – De acuerdo con el compromiso asumido en otras páginas del libro, de no evadir opinión en torno a cada una de las instituciones, nos abocaremos ahora al análisis institucional del alto tribunal en su actual composición. ¿Cuál es la evaluación de la actual composición en el delicado y fino ejercicio del control de constitucionalidad? ¿Qué tendencias políticas o institucionales está siguiendo? ¿Definen estas tendencias un marcado rol institucional?

¹⁸¹ Fallos, 313:1513.

¹⁸² CSJN, 1/2/02, "Smith, Carlos A. c/Estado nacional", JA, 2002-I-237; id. 5/3/03, "Provincia de San Luis c/Estado nacional", LL, 2003-B-537; JA, 2003-I-188, y ED, 201-377.

¹⁸³ CSJN, 13/7/04, "Cabrera, Gerónimo R. y otro c/Estado nacional", JA, 2004-III-186; id., 26/10/04, "Bustos, Alberto R. y otros c/Estado nacional y otros s/amparo", JA, 2004-IV-257; id., 5/4/05, "Galli, Hugo G. y otro c/PEN Ley 25.561 y decrs. 1570/01 y 214/02- s/amparo", JA, 2005-II-376; id., 27/12/06, "Massa, Juan A. c/Estado nacional", JA, 2007-I-187, e id., 15/3/07, "Rinaldi, Francisco A. y otro c/Guzmán Toledo, Renal, C. y otra", JA, 2007-II-537.

No creemos que haya una respuesta pacífica a estos interrogantes, pues cada visión estará influenciada por la formación y la ideología de cada analista, sin perjuicio de lo cual queremos compartir algunas tendencias que entendemos identificar, pero que pueden tener -como hemos dicho- diversas lecturas.

Para algún sector de la doctrina, en la década del noventa, la Corte fue consistente en apoyar el ejercicio del poder político en sus fallos, lo que le valió el mote de "mayoría automática", pero en los primeros años de la actual composición alternó la jurisprudencia dictada en causas políticamente importantes, optando por limitar o aprobar de manera significativa el ejercicio del poder político.

Más aún, en la era post-Menem, la Corte Suprema emitió distintas sentencias en casos muy similares en diversas áreas políticas, tornándose, en alguna medida, contradictoria. ¿Cómo se explica este cambio?

"Se destacan cuatro posibles explicaciones. Primero, este modelo de decisiones inestables puede reflejar simplemente el desequilibrio político y económico que marcó a la Argentina durante el período que siguió a la fecha en que Menem dejó su cargo en diciembre de 1999. Sin embargo esta explicación parece improbable. La crisis argentina se extendió desde mediados de 2001 a principios de 2003, mientras que la Corte Suprema continuó emitiendo fallos inconsistentes entre los últimos meses de 2003 y fines de 2005. Además, la Corte zigzagueó en causas que no tenían nada que ver con la crisis económica o política. De este modo, si bien la crisis es sin duda un factor que contribuyó a la inestabilidad en la jurisprudencia de la Corte después de 2000, es insuficiente por sí misma para explicar la volatilidad en la toma de decisiones.

Una segunda posibilidad es que los fundamentos utilizados por el tribunal para adoptar decisiones respecto a causas políticamente decisivas, se deberían tomar según su valor intrínseco. La Corte casi siempre ofrece explicaciones lógicas y convincentes para justificar la toma de sus decisiones, y por lo general indica las motivaciones que la impulsan a apartarse de su jurisprudencia precedente. Basándonos en sus fallos, podríamos llegar a la conclusión de que la jurisprudencia vinculada a los casos más críticos que

legaron a su conocimiento en el nuevo milenio fue consistente, dada la evolución en el marco legal y la falta de similitud entre las causas sobre las cuales dictó fallos en apariencia incompatibles.

No obstante, tanto juristas como expertos en ciencia política que han estudiado tribunales en diversos países han dudado mucho de que los fundamentos ofrecidos por las cortes en sus fallos reflejen completa y fielmente las motivaciones que hay detrás de sus decisiones. Este escepticismo me lleva a buscar razones alternativas para explicar el comportamiento de la Corte Suprema después de 2000.

La tercera y cuarta razón probables se pueden extraer de la literatura sobre la toma de decisiones judiciales. El modelo actitudinal, desarrollado más claramente en Estados Unidos de América sugiere que los jueces toman decisiones en forma muy similar a otros actores políticos, o sea, sus actitudes ideológicas respecto a las consecuencias políticas inciden en cómo votan las causas. Dada la rápida rotación tanto de presidentes como de jueces en la Argentina durante el período en estudio, este enfoque sugeriría que la incoherencia jurisprudencial existente reflejó la evolución en las inclinaciones ideológicas de la Corte a medida que cambiaba su composición. Sin embargo, esta explicación no puede aplicarse a toda la variación jurisprudencial observada durante el período en estudio, ya que a veces la misma configuración de la Corte emite fallos diferentes sobre causas muy similares¹⁸⁴.

"El enfoque 'actor estratégico', que considera a los jueces como actores políticos ambiciosos que emiten fallos guiados por las oportunidades y limitaciones del sistema político dentro del cual operan, también es prometedor. Los especialistas en temas vinculados con la Argentina han adoptado recientemente este enfoque para explicar la habilidad y disposición de la Corte para confrontar al gobierno. El es-

¹⁸⁴ Para brindar sólo dos ejemplos, mientras los mismos miembros formaron la Corte desde diciembre de 1995 hasta octubre de 2002, los fallos de la Corte Suprema en dos causas muy similares entre sí, "Kiper" y "Smith" (dictados el 28/12/01 y 1/2/02, respectivamente) fueron conflictivos. Algo semejante ocurrió con las decisiones de la Corte en las causas similares "Guida" y "Tobar" (dictadas el 2/6/00 y el 22/8/02, respectivamente).

tudio de HELMKE (2002) respecto de la jurisprudencia de la Corte entre 1977 y 1995, por ejemplo, encontró que en un entorno institucional incierto, y con el fin de ganarse a la administración entrante, los jueces fallaban en contra del gobierno en ejercicio con mayor frecuencia hacia el final de su mandato. Basándose en el análisis jurisprudencial de la Corte entre 1935 y 1998, IARYCZOWER *ET AL.* (2000) sostienen que la probabilidad de que los jueces de Argentina declaren inconstitucional una ley nacional o un decreto presidencial aumenta a medida que el número de jueces nombrados por el presidente en ejercicio disminuye, y cae a medida que crece el grado de control que el Poder Ejecutivo mantiene sobre la legislatura. En su estudio sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina y chilena desde la década del cuarenta a la década del noventa, SCRIBNER (2004) establece que la predisposición de los jueces a cuestionar las decisiones adoptadas por la autoridad presidencial dependió en gran medida de la relación que los ministros tenían con el presidente (en términos de haber sido designado por él o no), y de la probabilidad de que los jueces pudieran enfrentar mayorías coherentes o represalias políticas.

Si bien cada uno de estos estudios orientados por el enfoque 'actor estratégico' explica parcialmente el comportamiento de la Corte Suprema argentina en la era post-Menem, nuevamente ninguno explica el zigzag que observamos en la jurisprudencia de la Corte desde el año 2000. Como otros estudios de la escuela 'actor estratégico', estas explicaciones ponen de manifiesto la importancia de sólo uno, o a lo sumo dos objetivos para la toma de decisiones estratégicas (preocupación por la seguridad en el cargo en HELMKE; el deseo de apoyar al presidente que lo designó y el temor a tener sus decisiones revocadas en IARYCZOWER *ET AL.*; y el deseo de mantener la integridad institucional de la Corte y garantizar el cumplimiento de sus fallos en SCRIBNER).

Sin embargo, como las causas analizadas en este artículo lo demuestran, los jueces de la Corte Suprema tienen también otros objetivos que podrían motivar su toma de decisiones. Debido a que la escuela estratégica principalmente estudia las relaciones del tribunal con los otros poderes del gobierno, ella omite considerar cómo la relación cambiante de la Corte con la sociedad puede influir en sus objetivos es-

tratégicos. Además, el modelo estratégico no explica la razón por la cual la Corte dictaría fallos conflictivos en los casos en los cuales el gobierno no tendría una aparentemente fuerte preferencia política, o que carecían de importancia estratégica tanto para los poderes políticos como para la Corte.

En efecto, por sí solos, ninguno de los cuatro enfoques revisados es suficiente para explicar la jurisprudencia consistente de la Corte Suprema en las causas políticamente importantes decididas durante los últimos seis años. Sin embargo, en lugar de descartar estas fundamentaciones, me basé en ellas para generar una explicación alternativa sobre la base de micro y macroniveles de análisis.

En el micronivel, en lugar de ver el comportamiento del tribunal como respuesta a una o dos dinámicas políticas dominantes, como lo sugiere el enfoque "actor estratégico", sugiero que los jueces argentinos y sus sentencias en la era post-Menem estuvieron algunas veces motivados principalmente por necesidades constitucionales pero, por lo general y más a menudo, fueron influenciados fuertemente por las condiciones políticas de corto plazo (particularmente por las amenazas y presiones por parte del Poder Ejecutivo, y por la crisis económica y política).

Con el tiempo, estas condiciones fueron variando, afectando así al tribunal de distintas formas y en distintos momentos, llevándolo a dictar fallos contradictorios en casos similares.

¿Pero por qué la Corte fue tan permeable a los efectos de estas dinámicas políticas de corto plazo? En un nivel más amplio, sostendré que la presencia de valores extremos sobre cuatro variables institucionales claves, aumentaron la vulnerabilidad de la Corte hacia esos factores políticos.

En primer lugar, el déficit de legitimidad del tribunal que se solapó durante los años de Menem podría haber motivado a la Corte Suprema a alternar en su búsqueda de apoyo, tratando de conseguir el apoyo del gobierno en algunos momentos (mediante el dictado de fallos deferentes) y de la sociedad en otros (al cuestionar iniciativas del gobierno poco populares y de alta prioridad).

En segundo lugar, la existencia de altos niveles de discrecionalidad en la toma de decisiones les permitió a los jueces responder a las condiciones políticas más relevantes en cada momento de toma de decisiones. Asimismo, el he-

cho de no haber los jueces argentinos desarrollado una posición consensuada respecto al rol que desempeñan, los hizo particularmente vulnerables a las presiones de corto plazo y a las circunstancias cambiantes durante el período de caos posterior a Menem.

Finalmente, debido a que no se ha establecido ninguna relación institucional despersonalizada entre el tribunal superior por un lado, y el Poder Ejecutivo por otro, cada cambio de mandato ha tenido el potencial para cambiar radicalmente la relación entre la Corte y el presidente¹⁸⁵.

Desde nuestra perspectiva, sostenemos que la actual composición de la Corte Suprema ha repetido –en sus primeros momentos– la inclinación casi natural de apoyar las políticas principales del gobierno mayoritario.

No podemos olvidarnos que, una vez más en la historia argentina, el gobierno surgido de las elecciones del año 2003 quiso designar a la mayoría de la Corte Suprema y para ello promovió cinco juicios políticos y designó cuatro integrantes. Una vez que lo hizo, redujo la cantidad de ministros y estableció que la mayoría se lograría justamente con cuatro votos.

Más allá de que las designaciones recayeron saludablemente sobre juristas de dilatada trayectoria, el proceso de integración de la Corte Suprema fue uno de los más bochornosos en la historia del tribunal. La destitución de BOGGIANO fue una suerte de golpe institucional, materializado en un Estado de derecho que no debería olvidarse.

Las áreas esenciales para el gobierno mayoritario que han sido apoyadas incondicionalmente por la Corte Suprema en su composición actual, son la doctrina de la emergencia referida a la pesificación de la economía y la política de derechos humanos en torno a la revisión de la lucha antisubversiva.

Ambas cuestiones constituyeron las banderas políticas más importantes del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Los fallos de la Corte Suprema en torno a ellas, se alzaron –a nuestro criterio– con la correcta interpretación de las normas constitucionales.

¹⁸⁵ KAPISZEWSKI, *La Corte Suprema y la política constitucional en la Argentina post-Menem*, "Revista Jurídica de la Universidad de Palermo", 2006, p. 6 a 8.

En ambos casos la Corte Suprema falló a favor de la posición sostenida por el Gobierno, tensionando al límite, en la primera cuestión, el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Const. nacional, como expusimos en el párrafo anterior ("Cabrerá", "Bustos", "Galli", "Massa" y "Rinaldi"), y afectando seriamente en la segunda los principios constitucionales de legalidad, defensa en juicio y debido proceso, consagrados en el art. 18¹⁸⁶, como veremos luego con mayor detalle.

a) ROLES Y TENDENCIAS. LOS MODELOS "ACTITUDINAL" Y "ACTOR ESTRATÉGICO" EN SUS DECISIONES. La asunción de los poderes políticos elegidos para conducir la República Argentina en mayo de 2003, encabezados por el titular del Poder Ejecutivo nacional, Néstor Kirchner, enarboló inicialmente, como principio político prioritario –conforme hemos descripto– la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sospechada de haber estado alineada incondicionalmente con la política del ex presidente Menem (esta afirmación fue expuesta en un mensaje pronunciado por el presidente, emitido por la cadena nacional de medios de comunicación) e impedir la impunidad –a su criterio, latente¹⁸⁷– de todos los responsables de la llamada "guerra sucia", mediante la persecución y castigo de los autores mediatos e inmediatos del llamado "terrorismo de Estado".

Bajo esta línea de pensamiento político e ideológico marcada por el Ejecutivo, rechazada por algunos sectores de la sociedad, por considerarla parcial¹⁸⁸, se alineó el otro

¹⁸⁶ CSJN, 24/8/04, "Arancibia Clavel, Enrique L.", JA, 2004-IV-426; id., 23/12/04, "Simón, Julio H., y otros s/privación ilegítima de la libertad", EDCO, 2005-257; id., 10/5/05, "Lariz Iriondo, Jesús M.", JA, 2005-III-520; id., 11/7/07, "Derecho, René J.", JA, 2008-I-662; id., 13/7/07, "Mazzeo, Julio L., y otros", JA, 2007-III-573. Hemos analizado estas cuestiones en AMAYA, *Ideologías políticas e ideologías judiciales: reflexiones sobre la doctrina de la Corte Suprema argentina en torno a los delitos de lesa humanidad*, "Revista Jurídica de la Universidad de Jaén", segunda época, n° 8, p. 1 a 23.

¹⁸⁷ Debe recordarse que la principal conducción de la dictadura militar que gobernara la República Argentina entre 1976 y 1983 fue juzgada por la Cámara Federal Criminal y Correccional, en un hecho sin precedentes en la historia mundial, y condenada a prisión perpetua.

¹⁸⁸ Muchas posiciones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández podrían avalar dicho pensamiento. Entre otras, la designación de gran canti-

poder político del Estado, el Legislativo, el cual, en un acto sin precedentes –y contrariando principios constitucionales–, dispuso la “anulación” de las leyes llamadas de “obediencia debida” y “punto final”, dictadas en 1986 y 1987 por otro gobierno constitucional, excediendo las facultades del Legislativo y desconociendo la legitimidad soberana de aquella composición del Congreso¹⁸⁹.

De manera paralela a esta política de derechos humanos, el Ejecutivo y el Legislativo promovieron los juicios políticos de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de entonces, proceso que condujo a la renuncia de los ministros LÓPEZ, NAZARENO y VÁZQUEZ, y a la destitución por juicio político de los ministros MOLINÉ O’CONNOR y BOCCIANO, sumándose otra vacante en el alto tribunal con el retiro voluntario del doctor BELLUSCIO.

En este contexto histórico, jurídico y sociológico, asumieron cuatro de los actuales siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los doctores ZAFFARONI, ARGIBAY, HIGHTON DE NOLASCO y LORENZETTI, que se sumaron al doctor MAQUEDA, a quien –si bien había sido designado bajo la presidencia de Duhalde– temporalmente podemos considerarlo inmerso bajo un similar contexto fáctico.

Evidentemente, la línea argumental seguida por los fallos paradigmáticos dictados por la Corte Suprema en torno a la aplicación de la normativa internacional sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en nuestro ordenamiento jurídico, iniciados con “Arancibia Clavel”¹⁹⁰ y

dad de ex miembros de organizaciones terroristas en puestos públicos; la promoción de leyes indemnizatorias para sus familias y no para las de civiles y militares muertos en enfrentamientos con subversivos o derivados de ellos; el tratamiento de los integrantes de dichas organizaciones como “jóvenes idealistas de la década del setenta”; la implementación de una política sistemática de reformulación de la historia argentina en la educación pública y en la vida cívica, omitiendo la responsabilidad que cupo a estas organizaciones, así como la presencia permanente en los actos públicos, al lado de la autoridad presidencial, de la conductora de la organización “Madres de Plaza de Mayo”, Hebe de Bonafini, quien postula públicamente ideas de apoyo a distintas organizaciones terroristas del mundo.

¹⁸⁹ VANOSI, *Obediencia debida y punto final*, LL, 2003-E-1504.

¹⁹⁰ CSJN, 24/8/04, “Arancibia Clavel, Enrique L. s/homicidio calificado y asociación ilícita y otros”, JA, 2004-IV-426.

desanda el camino por ella misma recorrido en la composición anterior.

Lo mismo sucede con los fallos (que ya hemos citado) relacionados con la política económica de pesificación, que abandonaron la doctrina sentada por el alto tribunal en su composición anterior en el caso “Smith”¹⁹².

Ahora bien, ¿cómo explicar las decisiones que ilustran la nueva tendencia de la Corte Suprema en la temática que nos ocupa, marcando una importante diferencia con su composición anterior? Si bien es cierto que en los fundamentos de sus fallos el alto tribunal ofrece –en general– explicaciones lógicas que justifican ante el lector la toma de decisiones, indicando las motivaciones que posee para apartarse de sus precedentes, algún sector de la doctrina duda que ellos reflejen completa y fielmente las motivaciones que hay detrás de sus decisiones¹⁹³.

Por otra parte, en opinión de algunos medios de comunicación (lo cual más allá de la opinión del medio, refleja el pensamiento de un sector de la sociedad), el objetivo político que persiguió la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema se alineó con el objetivo ideológico del Gobierno, al coincidir con las reiteradas manifestaciones de las más altas autoridades de la Nación tendientes a dejar sin efecto las denominadas leyes de “obediencia debida” y de “punto final”¹⁹⁴.

Esta situación nos conduce a intentar encontrar las razones que se hallan detrás de los argumentos jurídicos utilizados por la Corte Suprema argentina para sustentar su línea argumental. Es decir, las razones de esta decisión judicial y no de otra, considerando que el tema no es baladí ni de fácil resolución.

La búsqueda de respuestas nos lleva a considerar los llamados “modelo actitudinal” y “actor estratégico”, propugnados por parte de la doctrina interdisciplinaria para eva-

¹⁹¹ CSJN, 14/6/05, “Simón, Julio H., y otros s/privación ilegítima de la libertad”, EDCO, 2005-257.

¹⁹² CSJN, 1/2/02, “Smith, Carlos A. c/Estado nacional”, JA, 2002-I-237.

¹⁹³ KAPISZEWSKI, *La Corte Suprema y la política constitucional en la Argentina post-Menem*, “Revista Jurídica de la Universidad de Palermo”, 2006-5.

¹⁹⁴ Diario “La Nación”, editorial del 8/9/05.

luar el contenido y las motivaciones de la toma de las decisiones judiciales.

El primer modelo sugiere que los jueces toman decisiones en modo similar al resto de los actores políticos del sistema. Las consecuencias políticas de sus actitudes inciden en cómo votan las causas. En este sentido, un giro importante en la jurisprudencia del alto tribunal revelaría los cambios "ideológicos" de sus componentes.

Por su parte, el modelo "actor estratégico" considera a los jueces como actores políticos que emiten fallos guiados por oportunidades y limitaciones del sistema político dentro del cual operan¹⁹⁵.

En un estudio sobre la jurisprudencia de las cortes supremas argentina y chilena desde la década del cuarenta hasta la del noventa, se establece que la predisposición de los jueces a cuestionar las decisiones adoptadas por la autoridad presidencial dependió, en gran medida, de la relación que los ministros tenían con el presidente (en térmi-

¹⁹⁵ El 5 de marzo de 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en un juicio en el cual la provincia de San Luis demandaba la devolución de un depósito bancario de US\$ 250.000. El dinero de San Luis había quedado atrapado en el banco por el congelamiento de las cuentas bancarias impuesto por el gobierno nacional (el "corralito"), y convertido por la fuerza a pesos devaluados. La provincia alegó que eran inconstitucionales tanto el congelamiento como la conversión forzosa de los fondos que habían sido impuestos por el gobierno nacional en un esfuerzo por estabilizar la economía durante la dramática crisis de la Argentina en 2001-2002. Llamativamente, la Corte respaldó el reclamo de San Luis, declarando la inconstitucionalidad de la conversión forzosa y ordenando la "redolarización" y devolución del dinero a la provincia. Para justificar su decisión, la Corte argumentó que el decreto que establecía la conversión forzosa había sido emitido a través de un procedimiento inconstitucional que violaba los derechos de propiedad y que era una respuesta irrazonable y carente de equidad respecto a la crisis. Esta decisión, para muchos, estuvo motivada políticamente y constituyó una reacción al gobierno nacional que amenazaba llevar a juicio político a la Corte en su totalidad y es un buen ejemplo para una lectura desde la teoría de actor estratégico. Un año y medio más tarde, con otra composición, la Corte dictó una resolución en contradicción con la primera en un caso similar ("Bustos"). Esta vez la Corte *convalidó* la conversión forzosa de los fondos, la misma política que había declarado *inconstitucional* apenas dieciocho meses antes. En este caso, lo que motivó aparentemente a la Corte a decidir de esta forma fue otro tipo de motivación política: el deseo de facilitar la estabilización económica mediante el respaldo de políticas que parecían haber mejorado el caos económico de los años anteriores.

nos de haber sido designados por él o no) y de la probabilidad de que los jueces pudieran enfrentar mayorías coherentes o represalias políticas¹⁹⁶.

Dichas variantes podrían explicar –según nuestra visión– el cambio de rumbo del alto tribunal respecto de sus precepciones en el tema de fondo que nos ocupa.

El "modelo actitudinal" estaría presente al haber advertido la Corte Suprema la conveniencia de asumir un posicionamiento ideológico cuyas consecuencias políticas incidirían en una notoria mejoría de su alicaída imagen ante la sociedad y en una armonía con los poderes políticos del gobierno ubicados en la misma línea de pensamiento, obteniendo apoyo de la sociedad y del gobierno (superación de déficit de legitimidad).

Asimismo, el enfoque "actor estratégico" (propio de un tribunal cuyo diseño institucional lo ubica en funciones de cogobierno, por medio de la herramienta del control de constitucionalidad) justifica la postura jurídica asumida por la Corte Suprema en atención a la crisis institucional que arrastraba el país y a los antecedentes de embates, presiones y descrédito que los poderes políticos en su conducta –respecto de los integrantes del Poder– venían desarrollando.

Por último, no podríamos tampoco descartar la predisposición de los jueces a identificarse con la política oficial de las mayorías, en atención a que todos los nuevos miembros habían sido nominados por el mismo presidente¹⁹⁷.

b) *LOS ROLES "CONTRAMAYORITARIO", "DEMOCRÁTICO", "CUSTODIO DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO", DE "EQUILIBRIO DE LOS PODERES" Y LA "TENDENCIA RESTRICTIVA"*. Como expusimos, interpretamos que la actual composición de la Corte Suprema sintió la necesidad –como otras tantas composiciones– de dar aval y acompañamiento al gobierno

¹⁹⁶ KAPISZEWSKI, *La Corte Suprema y la política constitucional en la Argentina post-Menem*, "Revista Jurídica de la Universidad de Palermo", 2006-7.

¹⁹⁷ Estas opciones podrían verse avaladas por parte de LORENZETTI, presidente de la Corte Suprema, quien nombra la posición del alto tribunal respecto del tema que nos ocupa como una política de Estado, lo que implica necesariamente una política en la que convergen los tres poderes del gobierno (en LORENZETTI - KRAUT, *Derechos humanos: justicia y reparación*).